



El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

10.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE TOMA EN CONSIDERACIÓN Y SE SOLICITA DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. (CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO).

Examinado el expediente administrativo del Proyecto de Ley de Régimen Jurídico de la Inspección Técnica de Vehículos en Canarias, en el ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas en materia de industria, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria y crediticia estatal, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 31.2.

Vista la Lista de Evaluación, en la que se analiza el impacto normativo y financiero del Anteproyecto de Ley y se evalúa el impacto de género y el impacto empresarial.

Visto informe de la Dirección General de Industria y Energía sobre el impacto en la infancia y la adolescencia.

Visto informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.

Vistos los trámites de información pública y de audiencia concedido a los cabildos insulares, ayuntamientos canarios (a través de la Federación Canaria de Municipios) y las entidades y organizaciones representativas de los sectores afectados.

Visto el trámite de consulta realizado a todos los departamentos del Gobierno de Canarias.

Vistos los informes emitidos por la Dirección General de Industria y Energía, de valoración de las observaciones realizadas.

Visto que se solicitó informe al Consejo Económico y Social de Canarias, hasta la fecha no emitido.

Visto informe de la Dirección General de Patrimonio y Contratación.

Vistos informes de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.





Visto informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos.

Visto informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.

Visto informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno del día 25 de octubre de 2017.

Considerando que es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.A.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.

Visto el artículo 1.e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, aprobado por Decreto 23/2016, de 4 de abril, por el que ese Departamento asume las competencias en materia de industria.

Visto lo dispuesto en el artículo 32.a) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En su virtud, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta del Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, acuerda:

Primero.- Tomar en consideración el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico de la Inspección Técnica de Vehículos en Canarias, en los términos del **anexo**.

Segundo.- Solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias sobre el referido Proyecto de Ley.

Lo que comunico a los efectos determinados por el artículo 29.1.I de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife,

**EL SECRETARIO GENERAL,
Ceferino José Marrero Fariña.**



ANEXO

PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La competencia relativa a la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos (ITV) fue transferida en el año 1984 por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, la cual asumió directamente la construcción y explotación de diversas estaciones de ITV en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, además de proveerse de una estación móvil para cubrir el servicio en las islas que no disponían de estación de ITV.

La primera norma autonómica que reguló este servicio fue el Decreto 94/1986, de 6 de junio, por el que se regula la red de estaciones de inspección técnica de vehículos automóviles en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta norma estableció un régimen mixto de explotación del servicio, que sería gestionado bien directamente por la Comunidad Autónoma, o a través de empresas, en régimen de concesión administrativa.

En aplicación de esta regulación, la Consejería competente en materia de industria convocó diversos concursos en 1988 para la explotación del servicio en las islas de Gran Canaria y de Tenerife (que fueron divididas en tres zonas concesionales cada una) y en 1995 en el resto de islas, bajo el régimen de concesión administrativa.

En este periodo, además, la Administración autonómica fue cediendo la explotación de las estaciones públicas de ITV a las empresas concesionarias correspondientes a las zonas concesionales en las que estaban situadas, en virtud de la formalización de los correspondientes contratos administrativos, con lo que la gestión del servicio quedó totalmente privatizada.

La Consejería competente en materia de industria inició en 2005 la tramitación de una norma que permitiera la entrada en el mercado de nuevos operadores con la finalidad de aumentar la competencia empresarial en el sector de la ITV, lo que redundaría en beneficio de los usuarios.

El resultado fue la aprobación del Decreto 93/2007, de 8 de mayo, por el que se establece el régimen de autorización administrativa para la prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se aprueba el Reglamento de instalación y funcionamiento de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos.

El Decreto 93/2007, de 8 de mayo, se redactó basándose en el artículo 7.2 del Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las





Telecomunicaciones. No obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional nº 332/2005, de 15 de diciembre, declaró que el artículo 7.2 del citado Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, vulnera las competencias autonómicas en materia de industria, al imponer la autorización administrativa como título habilitante para que los particulares puedan participar en la prestación del servicio de ITV, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en materia de industria puedan dictar disposiciones complementarias de las del Estado, siempre que no violen los mandatos o impidan alcanzar los fines perseguidos por la legislación estatal.

A este respecto, importa subrayar que la Consejería competente en materia de industria continuó con la tramitación del Decreto autonómico, amparándose en que la propia sentencia declara que las Comunidades Autónomas que ostentan la competencia exclusiva en materia de industria tienen la potestad normativa para establecer el modelo de gestión del servicio de inspección técnica a prestar por los particulares.

La puesta en práctica del régimen de autorización administrativa, como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 93/2007, de 8 de mayo, ha supuesto una gran dinamización del sector de la inspección técnica de vehículos en Canarias. Esta liberalización parcial ha permitido duplicar el número de estaciones de ITV, lo que ha originado un considerable aumento del empleo en el sector y ha mejorado de forma significativa la calidad del servicio, acercándolo a los usuarios y reduciendo los tiempos de espera.

No obstante, dada la importancia del sector de cara a la mejora de la seguridad vial, es conveniente dotar de mayor rango normativo al régimen jurídico del servicio de inspección técnica de vehículos, de forma que se asiente en una disposición con rango de ley que pueda ser desarrollada reglamentariamente sin que sea posible cuestionar la legalidad del procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones administrativas.

La presente Ley se dicta bajo los parámetros fijados por la Directiva 2014/45/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE, y siguiendo el pronunciamiento judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea recogido en su Sentencia de 15 de octubre de 2015 (asunto C-168-14), que la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, no es aplicable al sector de la inspección técnica de vehículos, al amparo de lo previsto en el artículo 2.2.d) de la citada Directiva, el cual excluye de su aplicación a los servicios de ámbito del transporte.

Por tanto, la presente Ley pretende confirmar y avalar el régimen de autorización administrativa para la prestación del servicio de ITV ya establecido en Canarias mediante el Decreto 93/2007, de 8 de mayo, a través de una norma de rango superior,





y respetando el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Decreto 93/2007, de 8 de mayo, además de instaurar el sistema de autorización administrativa para el servicio de ITV y de aprobar el correspondiente Reglamento, clarificó la situación en que quedaban las empresas concesionarias como consecuencia del nuevo régimen jurídico de prestación del servicio.

El Decreto, además, pretendía facilitar la continuidad del servicio tras la finalización de las concesiones, para lo cual previó la adopción de una serie de medidas en relación con las estaciones de ITV objeto de reversión, Estas medidas debían adoptarse con un año de antelación, buscando precisamente evitar interrupciones en la prestación del servicio.

La presente Ley mantiene el criterio de la continuidad del servicio, previendo la tramitación anticipada de los procedimientos patrimoniales, pero también hace especial hincapié en aspectos relativos al mantenimiento de los derechos laborales del personal que presta sus servicios en las estaciones de ITV que serán objeto de reversión. Ello es debido a que la aprobación del Decreto 93/2007, de 8 de mayo, que implicó que la Administración dejaba de tutelar activamente los servicios de inspección técnica de vehículos con una responsabilidad directa y propia, puso en situación de vulnerabilidad al personal afectado por la finalización de las concesiones. Por ello la Ley favorece la continuidad de estos trabajadores en sus puestos de trabajo, lo que tiene relevancia, no sólo bajo la óptica de sus derechos, sino también bajo la de la continuidad del servicio.

Finalmente, es necesario que una ley autonómica establezca un régimen sancionador específico en materia de ITV, que tipifique las infracciones, así como las sanciones administrativas frente a las conductas de los distintos agentes que operan en este sector que pudieran ser contrarias al ordenamiento jurídico.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de industria, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria y crediticia estatal, conforme dispone el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

En consecuencia, le corresponde a esta Comunidad Autónoma establecer el título jurídico a través del cual los particulares pueden participar en la gestión del servicio de inspección técnica de vehículos, tal como lo ha determinado, en su Sentencia nº 332/2005, el Tribunal Constitucional, que declara que las Comunidades Autónomas que ostentan la competencia exclusiva en materia de industria tienen la potestad normativa para establecer el modelo de gestión del servicio de inspección técnica de vehículos a prestar por los particulares.





La Ley consta de trece artículos, agrupados en tres capítulos, e incluye una disposición adicional, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.

El primer capítulo establece disposiciones de carácter general relativas a la Ley, definiendo en primer lugar su objeto y el régimen jurídico de la actividad de inspección técnica de vehículos, para, a continuación, dictar determinadas prescripciones generales de regulación de la actividad de prestación de este servicio por parte de las empresas y de la intervención administrativa en el sector.

El segundo capítulo establece determinados criterios relativos a la finalización de las distintas concesiones administrativas, de forma que se cumpla con las prescripciones de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias y que, en cualquier caso, se favorezca la continuidad del servicio en las instalaciones afectadas por el vencimiento de sus respectivos contratos concesionales.

Por último, el tercer capítulo establece el régimen sancionador aplicable al sector de la inspección técnica de vehículos, tipificando las infracciones, cuantificando las sanciones correspondientes y definiendo la posibilidad de suspensión de la actividad y las competencias administrativas en la materia.

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de la presente Ley es establecer el régimen jurídico de la inspección técnica de vehículos en la Comunidad Autónoma de Canarias, definir las normas por las que se regirá la extinción de las concesiones otorgadas para la prestación de este servicio en las diferentes zonas concesionales de Canarias y establecer el régimen sancionador de la actividad de inspección técnica de vehículos.

Artículo 2.- Régimen jurídico.

1. El régimen jurídico de la actividad de inspección técnica de vehículos en Canarias es el de autorización administrativa.

2. La actividad de inspección técnica de vehículos en Canarias se prestará en régimen de libre competencia empresarial, sin exclusividades territoriales.

3. Cuando dificultades técnicas o económicas impidan a los operadores privados la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos en una isla o parte de ella, la Consejería competente en materia de industria podrá asumir la gestión del servicio por cualquier forma de gestión directa o indirecta que permita la legislación aplicable.





Artículo 3.- Regulación de la actividad.

1. El Gobierno regulará por Decreto el procedimiento de otorgamiento y revocación de la autorización, así como los requisitos técnicos exigibles para la prestación de la actividad de inspección técnica de vehículos, para asegurar la calidad, imparcialidad y objetividad de las inspecciones y garantizar la competencia efectiva entre los distintos operadores.

2. Con el fin de garantizar los derechos de los usuarios, y por razones imperiosas de interés general, la Consejería competente en materia de industria podrá establecer, para aquellas islas en las que no exista competencia empresarial entre establecimientos de inspección técnica de vehículos, criterios técnicos y de mercado que sean específicos y diferenciados de los que se establezcan para estos establecimientos cuando estén situados en el resto de los territorios insulares.

3. La actividad estará sometida a control permanente por parte de la Consejería competente en materia de industria, que velará porque las inspecciones de vehículos se efectúen de acuerdo con los criterios definidos en la reglamentación aplicable. La Consejería competente en materia de industria comprobará también que se mantienen las condiciones exigibles al personal inspector y a las empresas y establecimientos autorizados.

4. Las estaciones ITV deberán disponer de acreditación de cumplimiento de la norma UNE-EN ISO/IEC 17.020, en los términos establecidos reglamentariamente. La pérdida o no disponibilidad de dicha acreditación implicará la paralización inmediata de la actividad hasta que, una vez obtenida una nueva acreditación, se dicte resolución al respecto.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES RELATIVAS AL ANTIGUO RÉGIMEN CONCESIONAL

Artículo 4.- Extinción del régimen concesional.

1. Las concesiones del servicio de inspección técnica de vehículos otorgadas antes de la entrada en vigor de esta Ley, incluyendo sus correspondientes contratos concesionales, permanecerán vigentes hasta su extinción en lo que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley y en el resto de la normativa de aplicación.

2. Finalizado el plazo de vigencia de las concesiones, los terrenos, obras, instalaciones y equipos afectos a todas las estaciones de inspección técnica de vehículos, tanto las ejecutadas por los concesionarios como las gestionadas por estos en base a una concesión demanial, revertirán a la Comunidad Autónoma de Canarias como bienes o derechos patrimoniales, sin que el concesionario tenga derecho a percibir ninguna indemnización.





3. La recepción formal de los bienes, como consecuencia del proceso de reversión, se hará por la Consejería competente en materia de industria, a través del correspondiente acta de toma de posesión.

Artículo 5.- Actuaciones relativas a los bienes objeto de reversión y al personal de las estaciones afectadas.

1. Con la suficiente antelación a la finalización de los respectivos contratos concesionales y en relación con los bienes objeto de reversión, las Consejerías competentes en materia de industria y de hacienda propondrán las actuaciones e instruirán los procedimientos oportunos regulados en la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, encaminados a traspasar los bienes y derechos objeto de reversión a operadores que estén en activo o acrediten las condiciones requeridas para estarlo. La efectividad de las resoluciones que, en su caso, se adopten en estos procedimientos solo se producirá tras finalizar la vigencia de los contratos concesionales.

2. Los pliegos reguladores de tales procedimientos incluirán cláusulas en cuya virtud quienes pudieran resultar adjudicatarios se obligan a subrogarse en las obligaciones laborales vigentes en el momento de la adjudicación, con los efectos previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

3. Una vez publicados los correspondientes pliegos y en el plazo de treinta días naturales desde la notificación fehaciente a que hace referencia el artículo 86 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, los titulares de las concesiones deberán comunicar su pretensión de continuar prestando el servicio cumpliendo las condiciones que allí se estipulen, manifestando a tal efecto su decisión de ejercitar el derecho de adquisición preferente regulado en el citado artículo 86 de la citada Ley 6/2006, de 17 de julio.

4. De no producirse dicha comunicación, los procedimientos continuarán su tramitación para cualquiera que reúna las condiciones para ser adjudicatario en los términos que dichos pliegos establezcan. La instrucción de dichos procedimientos se sujetará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad tal como dispone el artículo 7.c) de la citada Ley 6/2006, de 17 de julio. La efectividad de las resoluciones que, en su caso, se adopten en estos procedimientos sólo se producirá tras finalizar la vigencia de los contratos concesionales.

Artículo 6.- Fianzas.

1. En el supuesto de que los antiguos concesionarios del servicio de inspección técnica de vehículos continúen con la gestión de todas las estaciones vinculadas a una





zona concesional, la devolución de la fianza se efectuará de oficio por la Administración.

2. En caso de que se materialice un cambio en la gestión de alguna de las estaciones de la zona concesional, el concesionario podrá solicitar la devolución de la fianza dos meses después de producida la reversión de la instalación en los términos y con los requisitos señalados en los correspondientes pliegos concesionales.

3. La devolución de las correspondientes fianzas precisará de resolución favorable de la Consejería competente en materia de industria, en la que se deberán incluir aspectos referentes a la idoneidad en la transferencia de la gestión de cada estación de inspección técnica de vehículos y al correcto estado de conservación de las obras y de funcionamiento de los equipos de las estaciones de inspección técnica de vehículos afectadas. Esta resolución deberá dictarse en un plazo no superior a tres meses desde la finalización de las concesiones o desde la solicitud de devolución de la fianza, según se den los supuestos contemplados en los apartados 1 o 2 de este artículo.

CAPÍTULO III RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 7.- Sujetos responsables.

1. Las personas físicas que realizan funciones de dirección técnica de las estaciones de inspección técnica de vehículos, o de inspección y supervisión de las inspecciones técnicas de vehículos, así como las entidades mercantiles que desarrollan la actividad de inspección técnica de vehículos, son sujetos responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley.

2. Si existe más de un sujeto responsable de la infracción o si la infracción es consecuencia de la acumulación de actividades cumplidas por personas diferentes, las sanciones que se deriven son independientes unas de otras.

3. Si dos o más personas son responsables de una infracción y no puede determinarse su grado de participación, estas personas son solidariamente responsables a los efectos de las sanciones que derivan de la infracción.

4. Las entidades que realizan las inspecciones técnicas de vehículos son responsables subsidiarias respecto a las infracciones cometidas por el personal a su cargo.

Artículo 8.- Clasificación de las infracciones.

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de inspección técnica de vehículos las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas en





el apartado siguiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

2. Las infracciones tipificadas por la presente Ley se clasifican en leves, graves y muy graves:

A) Son infracciones muy graves las siguientes:

a) La reincidencia en falta grave por la que se hubiese sido sancionado en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

b) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector de la Comunidad Autónoma responsable del control de la inspección técnica de vehículos.

c) Las tipificadas como infracciones graves, cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la seguridad vial, la flora, la fauna, los bienes o el medio ambiente.

B) Son infracciones graves las siguientes:

a) La puesta en funcionamiento de estaciones de inspección técnica de vehículos o de ampliaciones de las mismas careciendo de la correspondiente autorización.

b) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos exigidos.

c) La resistencia a permitir el acceso o facilitar la información requerida por la Administración pública competente.

d) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares que formule la autoridad competente, cuando se produzca de modo reiterado.

e) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.

f) El incumplimiento de las prescripciones dictadas por la autoridad competente, en cuestiones de seguridad o medio ambientales.

g) La utilización incorrecta de equipos e instalaciones y la inadecuada conservación y mantenimiento de instalaciones, si de ello puede resultar un peligro para las personas, la seguridad vial, la flora, la fauna, los bienes o el medio ambiente.





h) La realización de una inspección vulnerando las directrices de la Administración competente, cuando suponga riesgo grave para la seguridad.

i) La realización de inspecciones mediante equipos que no cumplan con las prescripciones reglamentarias.

j) La reiteración de inspecciones vulnerando las directrices de la Administración competente o actuaciones contrarias al manual de inspecciones que implique niveles de rechazo en una estación muy por debajo de la media de Canarias.

k) La reincidencia en falta leve por la que se hubiese sido sancionado en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

l) El ejercicio de la actividad en una estación de ITV sin contar con la acreditación en vigor para dicha estación, según los términos establecidos reglamentariamente.

C) Son infracciones leves las siguientes:

a) La realización de una inspección vulnerando las directrices de la Administración competente, cuando no suponga riesgo grave para la seguridad.

b) El incumplimiento de los requerimientos específicos o las medidas cautelares que formule la autoridad competente dentro del plazo concedido al efecto, siempre que se produzca por primera vez.

c) La falta de subsanación de las deficiencias detectadas en inspecciones y revisiones reglamentarias en el plazo señalado en el acta correspondiente o la falta de acreditación de tal subsanación ante la Administración Pública competente, siempre que dichas deficiencias no constituyan infracción grave o muy grave.

d) La inadecuada conservación y mantenimiento de las instalaciones, cuando no constituya infracción grave o muy grave.

e) La falta de colaboración con las Administraciones Públicas en el ejercicio por estas de sus funciones de inspección y control derivadas de esta Ley.

f) El incumplimiento, por simple negligencia, de los requisitos y obligaciones establecidos en la normativa vigente, siempre que se produzca riesgo para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente y este sea de escasa incidencia.





Artículo 9.- Sanciones.

1. Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:

- a) Las infracciones leves con multas de hasta 3.005,06 euros.
- b) Las infracciones graves con multas desde 3.005,07 hasta 90.151,82 euros.
- c) Las infracciones muy graves con multas desde 90.151,83 hasta 601.012,10 euros.

2. Para determinar la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

- a) La importancia del daño o deterioro causado.
- b) El grado de participación y el beneficio obtenido.
- c) La capacidad económica del infractor.
- d) La intencionalidad en la comisión de la infracción.
- e) La reincidencia.

Artículo 10.- Revocación y suspensión de la actividad.

En los supuestos de infracciones muy graves, podrá imponerse la sanción de revocación de la autorización habilitante para el ejercicio de la actividad de inspección de vehículos, en cuyo caso, una vez iniciado el procedimiento, podrá esta suspenderse provisionalmente.

Artículo 11.- Prescripción.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación. El cómputo del plazo de prescripción se iniciará en la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, si se trata de una actividad continuada, en la fecha de su cese.

2. El plazo de prescripción de las sanciones establecidas en esta Ley será de cinco años para las referidas a infracciones muy graves, tres para las graves y uno para las leves.





Artículo 12.- Procedimiento.

1. La imposición de las sanciones administrativas se ajustará a la normativa que rige el procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad sancionadora.

2. El plazo máximo para la resolución y notificación de los procedimientos sancionadores tramitados al amparo de esta Ley será de un año, a contar desde la fecha en que se produjo el acto administrativo del inicio del procedimiento sancionador.

Artículo 13.- Competencia para resolver.

La imposición de las sanciones por la comisión de infracciones muy graves, graves y leves corresponderá a los órganos administrativos fijados por el Reglamento Orgánico de la Consejería competente en materia de industria.

Disposición adicional única.- Asunción de la explotación de las estaciones ITV por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En el supuesto de que, una vez culminados los procedimientos patrimoniales a los que se refiere el artículo 5 de esta Ley, no haya sido posible adjudicar la titularidad o explotación de determinadas estaciones ITV a ninguna entidad privada, y cuando razones justificadas de excepcional interés apreciadas por la Consejería competente en materia de industria aconsejen la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante gestión directa a través de sociedad mercantil pública, podrá asumir la explotación de todas o algunas de las estaciones ITV afectadas, la cual se subrogará en los derechos y obligaciones que tuvieran los concesionarios con los trabajadores de estas estaciones.

Disposición transitoria primera.- Finalización de las concesiones.

1. Si, a la finalización de cualquiera los contratos concesionales, no se hubiera culminado el procedimiento patrimonial definido en el apartado 1 del artículo 5, el anterior concesionario asumirá la gestión de la estación ITV, con carácter provisional, hasta la terminación del citado procedimiento, y manteniendo en este caso los trabajadores de la empresa afectada las mismas condiciones laborales.

2. El vencimiento del plazo de vigencia de las concesiones implicará el otorgamiento directo de la autorización administrativa para las correspondientes estaciones de inspección técnica de vehículos, en favor de la entidad que a partir de ese momento vaya a encargarse de la explotación provisional o definitiva de la estación, sin necesidad de efectuar otros trámites administrativos. No obstante, el centro directivo competente en materia de industria dictará resolución de reconocimiento expreso de la autorización.





3. Estas estaciones, tras el otorgamiento de la autorización administrativa, dispondrán de un plazo de un año para justificar que disponen de acreditación según la norma UNE-EN ISO/IEC17.020.

Disposición transitoria segunda.- Vigencia de las normas anteriores.

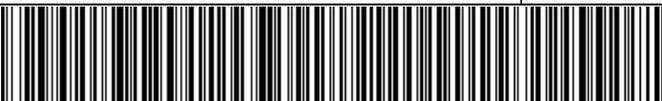
Hasta que se materialice el desarrollo reglamentario de la presente Ley, y en lo que no se oponga a lo establecido en la misma, permanecerán vigentes el Decreto 93/2007, de 8 de mayo, por el que se establece el régimen de autorización administrativa para la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos en la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se aprueba el Reglamento de instalación y funcionamiento de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, así como las normas que regulan el sector de la inspección técnica de vehículos en Canarias.

Disposición final primera.- Desarrollo normativo.

El Gobierno dictará las disposiciones reglamentarias que se requieran para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

Disposición final segunda.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
CEFERINO JOSE MARRERO FARIÑA - SECRETARIO/A GENERAL	Fecha: 31/10/2017 - 12:02:16
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
REGISTRO INTERNO - N. Registro: PGSG / 16385 / 2017 - Fecha: 31/10/2017 12:45:16	Fecha: 31/10/2017 - 12:45:16
REGISTRO INTERNO - N. Registro: PGSG / 4064 / 2017 - Fecha: 31/10/2017 12:43:34	Fecha: 31/10/2017 - 12:43:34
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0vsTHzKSvN1RkmnVZE-6TXKQBZZdX3otT	 
El presente documento ha sido descargado el 02/11/2017 - 07:18:21	